

INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS

BOLETIN DE COYUNTURA POLITICA Y ECONOMICA **IEP**

Argumentos

Presentación

Esta es una publicación del
Instituto de Estudios
Peruanos
Año / 2
Número 18
Precio S/. 5.00
Horacio Urteaga 694
Lima 11, Perú
Telf. 32-3070 / 24-4856
Fax [51-14] 32-4981
Correo electrónico
IEPEDIT@IEP.ORG.PE
Impreso por Tarea
Asociación Gráfica
Educativa
Lima, abril de 1994

SUSCRIPCION
Nacional S/. 65
Extranjero US\$ 70
(Doce números)
ISSN 1021-2760

18

COMITÉ EDITORIAL

Carlos Iván Degregori
Romeo Grompone
(coordinador)
Teobaldo Pinzás

COLABORADORES

Roxana Barrantes
Cecilia Blondet
Paul Collazos
Julio Cotler
Marcos Cueto
Ponciano del Pino
Luis Miguel Glave
Jürgen Golte
Efraín Gonzales de Olarte
Eduardo González Cueva
Carlos Mejía
Lucía Romero
Fernando Rospigliosi
Carolina Trivelli
Jaime Urrutia
Rafael Varón
Francisco Verdera
Carmen Yon
Patricia Zárate

El confuso panorama que existía alrededor de las elecciones presidenciales de 1995 comienza a despejarse. En un sorprendente viraje, la mayoría parlamentaria aceptó la propuesta presentada por el Colegio de Abogados de Lima, según la cual será el actual Jurado Nacional de Elecciones el encargado de organizar el proceso electoral. Se evitan así las complicaciones de poner en marcha en cortísimo plazo el nuevo sistema creado por la Constitución de 1993, propuesta que había despertado enormes suspicacias sobre las intenciones del gobierno.

Voceros del régimen se apresuraron a decir que con esta medida la transparencia del proceso electoral estaba garantizada. Pero existiendo la posibilidad de reelección y en un contexto de centralización de poder en el Ejecutivo y estrecha alianza del presidente con la cúpula militar, la aprobación del proyecto del CAL es sólo el primer paso de una difícil marcha cuesta arriba para garantizar la limpieza de las elecciones de 1995.

Como para verificar los peligros del actual autoritarismo, en los últimos días

surgir serias denuncias sobre matanzas indiscriminadas en Huánuco, donde el Ejército desarrolla una importante ofensiva contra Sendero Luminoso. Si bien, como ha afirmado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas tienen el deber de combatir y derrotar a Sendero Luminoso y el MRTA, no es posible a estas alturas reincidir en tácticas de tierra arrasada, que creíamos superadas. Deben investigarse a fondo estas denuncias y, de ser ciertas, sancionarse a los responsables. Por el bien del país, La Cantuta no puede repetirse.

Contenido

COYUNTURA POLITICA

Definiendo el escenario electoral 2

COYUNTURA ECONOMICA

La buena estrella del presidente Fujimori
Teobaldo Pinzás 5

ECONOMIA

La situación del empleo en Lima en 1993
Francisco Verdera V. 6

VIOLENCIA

Consecuencia de los conflictos
violentos internos
Meter Waldmann 10

CRITICA Y RESEÑA

Sobre fautes e intelectuales: dos libros sobre
delincuencia y sociedad en la Lima de hoy
Carlos Aguirre 14

DEFINIENDO EL ESCENARIO ELECTORAL

Javier Pérez de Cuel-
llar, haciendo refe-
rencia a las condi-
ciones instituciona-
les para presentar
su candidatura, y
Ricardo Belmont en
su impugnación del
Decreto Ley 776,
coinciden en exigir

reglas claras y definiciones pre-
cisas y unívocas, cuando las
elecciones de 1995 empiezan a
marcar el ritmo de los aconteci-
mientos. Quizás pueda esperarse
demandas de parecido tenor
por parte de los inversionistas
extranjeros. Fujimori por pri-
mera vez se encuentra en una
posición desconcertante ya que
en su contra comienzan a jugar
tanto sus éxitos como sus excesos.
No puede haber comicios traspa-
rentes si no se simplifican los
procedimientos de organiza-
ción y supervisión de las
elecciones. Existen justificadas
aprehensiones que no se va a
disponer del tiempo suficiente
para elegir el Consejo de la Ma-
gistratura y designar los respon-
sables del Jurado Nacional de
Elecciones, la Oficina Nacional
de Procedimientos Electorales
y el Registro Nacional de Iden-
tificación y Estado Civil. La
prensa que apoya al gobierno,
temerosa de que el régimen
pierda aceleradamente legiti-
mación política, argumenta so-
bre la conveniencia de reformar
la carta pocos meses después
que entrara en vigencia, adu-
ciendo razones de seguridad ju-
rídica.

Problemas de un presidente candidato

El éxito de las privatizaciones
introduce una nueva preocupa-
ción: que exista previsibilidad,
que las decisiones no rijan por
un corto plazo y que se evite la
polarización porque sus efectos
pueden trasladarse en poco
tiempo de la política a la econo-
mía. La presunta eficacia del
golpe de estado de abril de
1992 para destrabar una situa-
ción de bloqueo, ya no sirve pa-
ra justificar nuevos desbordes
de la autoridad si se quiere que
el país transite con orden hacia
el desarrollo y si se desea evitar
que cada conflicto o discrepan-
cia divida las aguas al punto
que no pueda verse la orilla en
que desembarcar. La afirma-
ción de la democracia en este
nuevo contexto parece respon-
der tanto a la defensa de valo-
res de convivencia como a la
necesidad de asumir posiciones
pragmáticas.

Fujimori se ha dedicado con
particular empeño a crear un
clima de encono y desconfianza
respecto a los partidos políticos
y al interior de las fuerzas ar-
madas y el personal diplomáti-
co. Seguir con este estilo puede
traerle más problemas que ven-
tajas. Y sin embargo no puede
cambiarlos porque en él se apo-
ya su arte de gobernar, si así se
le puede llamar; es su definitivo
sello de fábrica. Un contenido
tolerante permitiría darle ma-
yor espacio a sus opositores,
este espacio, que Fujimori se ha
preocupado por reducir hasta

el límite en que no provoque re-
sistencias en la comunidad in-
ternacional y la opinión pública.
En cambio, la persistencia de
una actitud beligerante con-
tradice una perspectiva de orden
y de cambio en el mediano
plazo, para que un grupo cre-
ciente de la opinión pública, ya
no pueda quedar pendiente de
las pequeñas y grandes manio-
bras del titular del ejecutivo.

A Fujimori le cuesta cada
vez más lograr que se confun-
dan el proyecto del país con su
propio proyecto. La reelección
no está garantizada. El apoyo a
la gestión del presidente no se
trasvasa necesariamente a su
candidatura por un período más.
La opinión pública invocada
por Fujimori para justificar sus
actos, se le debe antojar ahora
cambiante y veleidosa.

En este nuevo contexto debe
comenzar su campaña electoral
y al mismo tiempo sugerir que
por allí no va su preocupación
primera. Las declaraciones del
presidente en los programas ra-
diales o de televisión de los fi-
nes de semana, en la que busca-
ba el impacto a través del en-
frentamiento con la oposición o
la generación de nuevos acon-
tecimientos políticos, es susti-
tuida ahora por la aparición en
los noticieros semanales inau-
gurando colegios, carreteras,
obras. Fujimori que tenía un
particular aprecio por las nove-
dades parece descubrir las vir-
tudes de la rutina. Prefiere el
acostumbramiento de la gente a
su presencia cotidiana, frente a
los peligros de un discurso ela-
borado, que tanto puede llevar
al convencimiento como a la
crítica.

Las dudas de la oposición

Las encuestas de opinión pública, cuando no se las interpreta desapasionadamente, pueden convertir verdades en espejismos. La oposición corre el riesgo de encandilarse pensando que está cerca del objetivo, cuando todavía camina a los tropiezos. Los sondeos indican que en caso que los únicos contendores sean Fujimori y Pérez de Cuellar, el ex secretario general de la ONU saldría victorioso en una hipotética segunda vuelta en la mayoría de las provincias, quedando por disputar Lima. Sin embargo resulta en extremo improbable que las elecciones sean entre sólo dos candidatos. Menos razonable suponer que si ello ocurriera finalmente, la campaña se va a plantear en términos de un apacible intercambio de ideas entre caballeros, sobre matices y acentos en las opciones programáticas, como parece ser el planteo de Pérez de Cuellar. La trayectoria de Fujimori indica que según su criterio los buenos modales se asocian a la vacilación y la ingenuidad. Probablemente ya esté preparando con sus asesores el momento de desatar una andanada de golpes que dejen al adversario sin reflejos para reaccionar.

Los partidos están obligados a actuar con prudencia para recuperar la popularidad perdida y no prestarle servicios al gobierno por la reiteración de sus errores. Aún cuando persisten dificultades para recuperar su capacidad de convocatoria, los

partidos por lo menos están introduciendo discusiones realistas sobre alternativas de gobierno y democratización de las organizaciones, comprendiendo la mayoría de sus dirigentes que son los mejores tiempos para sus expectativas o sus oportunismos personales.

En el Partido Popular Cristiano el retorno de Alberto Borea, obligado a exiliarse cuando se le quiso involucrar en el intento golpista del general Salinas Sedó, ha provocado fuertes tensiones en una organización en la que, luego de su discutida participación en el CCD, no ha logrado definir un perfil claro con respecto al gobierno. El sector más cercano a la doctrina social cristiana mantiene desde el 5 de abril una posición crítica a las medidas antidemocráticas tomadas por el titular del ejecutivo. Otros grupos poco apegados a las teorías y los principios parecen no estar disgustados con el estilo autoritario y el programa neoliberal de Fujimori. Bedoya Reyes declara su apoyo a Pérez de Cuellar, anticipando posibles conflictos y tratando de sortearlos. Sin embargo no puede evitar que se alejen algunos dirigentes, como ha ocurrido con Gonzáles Reátegui. Estas deserciones influyen tanto en el acuerdo con el gobierno, como en las ventajas que pueden lograrse por apoyar al oficialismo. La mayoría de los representantes de Cambio 90 y Nueva Mayoría no se han caracterizado precisamente por su capacidad y su elocuencia, lo que los ha obligado al silencio y al olvido. Los disidentes de partidos conservadores que se acercan al

gobierno pueden suponer que van a ser electos sin problemas e incluso alcanzar un protagonismo que se apoya en la habilidad de sacar ventaja de la mediocridad de sus nuevos compañeros de ruta. Tienen la ocasión para un reciclaje que Fujimori va a alentar.

Acción Popular en esta coyuntura es el partido que probablemente tiene mayor voluntad política para recuperar sus vínculos con la sociedad. Belaúnde ha realizado mítines en diversas ciudades de provincias, donde ha logrado niveles respetables de aceptación. La estrategia de esta organización es colocarse en una posición destacada, de modo de constituirse en interlocutor imprescindible cuando Pérez de Cuellar decida iniciar su campaña.

El Apra y la izquierda

En el Apra y la izquierda quedan muchas dudas que resolver y temas por definir. En el primer caso, las constantes denuncias contra el ex presidente Alan García por diversas irregularidades durante su gestión, han dividido a la dirigencia. Por un lado los seguidores de Alan García consideran tarea prioritaria del partido la defensa de su líder así como mantener una línea claramente opositora y un perfil propio frente a los demás partidos de oposición. Otro grupo plantea una posición cuestionadora de la gestión del gobierno anterior y defienden la

renovación del discurso político del aprismo. Esta tendencia parece estar interesada en colaborar con la candidatura del ex secretario general de la ONU. La convocatoria para un congreso a mediados de julio, que resuelva estas disputas, parece ser la salida que han encontrado por este período.

Los partidos y movimientos de izquierda que aún mantienen algún nivel de vigencia confrontan también problemas respecto a su alineamiento electoral. Apoyar a Pérez de Cuellar les permitiría manejar una opción que no los compromete en un eventual fracaso. Reduciría en cambio los márgenes para definir su presencia en la vida nacional. Si la izquierda no es capaz de elaborar una propuesta renovadora, susceptible de convencer a amplios sectores de la ciudadanía, perdería vigencia histórica. La participación con su propia lista la puede llevar tanto a hacer visible su extremo aislamiento, como ser el primer paso de una paulatina recuperación. La decisión que se tome requiere sopesar cuidadosamente los argumentos a favor o en contra y también voluntad y audacia para arriesgar.

Expectativas y peligros

El gobierno seguirá insistiendo en sus éxitos en el control de la inflación y la lucha contra los grupos subversivos, pero estos logros parecen entusiasmar menos a la población. Comienzan

a surgir de manera dispersa y desordenada reivindicaciones y reclamos de trabajadores, desempleados, grupos empresariales que presionan por el establecimiento de políticas de apoyo social, empleo y reactivación económica. Fujimori decide dar un aumento a los empleados públicos y los maestros y subir el salario mínimo. Sin embargo ello no resulta suficiente cuando las prioridades se han trasladado al campo económico. Desatender los crecientes reclamos ciudadanos le daría mayores oportunidades a la oposición. Apartarse de los lineamientos de la política económica del gobierno le quitaría credibilidad. A Fujimori le llegó también el tiempo de la incertidumbre, difícil de sobrellevar para quien ha querido imponer un proyecto autoritario. Estamos en un período en que comienzan a avizorarse a la vez salidas institucionales y probables actos del gobierno que obstaculicen el retorno a la democracia.

Nuevos enfrentamientos en el Huallaga

Violentos enfrentamientos entre fuerzas del ejército y miembros de Sendero Luminoso en el departamento de Huánuco en las zonas denominadas Bolson Cuchara y Primavera han acaparado la atención pública en la última semana. En esos lugares los subversivos tenían controlado un territorio más o menos considerable y habían

sometido a la población lugareña, dedicada –voluntariamente o no– al cultivo de coca. Los primeros informes periodísticos dieron cuenta de helicópteros militares disparando sus cohetes contra la población civil.

El gobierno ha impedido el ingreso independiente de la Cruz Roja Internacional y de los organismos defensores de derechos humanos a la zona, a la vez que ha negado enfáticamente que se haya bombardeado a la población civil. Sin embargo, testimonios gráficos y entrevistas a refugiados señalan lo contrario. Estos manifestaron, además, que se encontraban bajo el dominio senderista en contra de su voluntad. Y que si el ejército hubiera creado las condiciones para reintegrarse a la legalidad, lo hubieran hecho.

La estrategia antisubversiva, tal como había sido diseñada por el alto mando del ejército y el presidente, buscaba, mediante las leyes de arrepentimiento, separar a la población que contra su voluntad hubiera sido involucrada en las actividades subversivas. Sin embargo en esta oportunidad no se dieron las medidas necesarias para poder distinguir a la población civil de los militantes y cuadros senderistas y evitar que los primeros se encuentren en los lugares donde se realizarían los enfrentamientos.

A nivel internacional, los reparos por parte de las autoridades políticas y militares contra organizaciones como la Cruz Roja Internacional –un jefe militar declaró que sus integrantes eran confidentes de Sendero– solamente aumen-

LA BUENA ESTRELLA DEL PRESIDENTE FUJIMORI

tan el desprestigio del actual gobierno en materia de respeto a los derechos humanos.

A nivel interno, los últimos sucesos han significado un "cierre filas" para los miembros del oficialismo. Los medios periodísticos cercanos al régimen ignoran o relativizan las denuncias de los sobrevivientes, mientras la opinión pública no logra establecer con claridad los hechos. El ambiente pre-electoral y el optimismo en materia de lucha antisubversiva, que lleva a subrayar la 'inoportunidad' de las denuncias de los organismos defensores de los derechos humanos, pueden ser elementos en contra de una adecuada investigación para estos lamentables hechos. □

E

Teobaldo

Pinzás

n medio de una atmósfera de optimismo, salpicada de las declaraciones entusiastas de uno que otro funcionario de empresas transnacionales, transcurrió el mes de marzo. Mientras tanto altos funcionarios del gobierno analizaban qué harán con los fondos obtenidos por la venta de CPT-ENTEL y de las próximas empresas públicas que se subasten. La economía siguió creciendo, pero, contra las expectativas de la misma política de ajuste. Dicho crecimiento se ha orientado hacia el mercado interno, persistiendo los problemas de empleo, tasa de cambio y tasa de interés. Por primera vez desde que asumió el poder el ingeniero Fujimori, las cuentas fiscales experimentan cierto alivio y permiten por ejemplo aumentar algo las remuneraciones, lo que no está mal, pero en época electoral puede servir para más de un fin.

Continúa la recuperación productiva

Los indicadores de producción dados a conocer entre marzo y la primera mitad de abril señalan la continuación de la recuperación de la producción, que estaba en marcha. Según cifras oficiales el **PBI** de enero era 9.7% superior al nivel del año anterior; para febrero la cifra respecto a 1993 fue un aumento

de 6.6%. Dejando de lado la pesca, que puede tener incrementos más elevados pero experimenta fluctuaciones estacionales y vedas periódicas por razones biológicas (períodos de reproducción de las especies marinas bajo explotación), el sector que más alto crecimiento registra es la construcción (en enero 31% y en febrero 22%, respecto al mismo mes del año pasado), como ha sucedido en otros períodos de recuperación productiva. El segundo lugar en cuanto a crecimiento ha correspondido a la generación de energía eléctrica (30.3 y 10.3%), seguida por la industria manufacturera (13.5 y 8.7%) y el comercio (6.4 y 8.7%). Sorprendentemente (y en gran medida por la abundancia de agua que ha caracterizado a este año agrícola), el sector agropecuario también muestra una evolución positiva (10.3 y 4.1 %).

Como, a excepción de Lipeca y la minería, la casi totalidad de esta producción no se exporta, la recuperación que se está observando se basa en la demanda interna. Y en un mayor uso de la capacidad instalada, ya que la nueva inversión que está en funcionamiento no es aún significativa en términos cuantitativos. En realidad, salvo el caso de varias ramas de la industria manufacturera, los sectores cuya producción está en aumento generan bienes y servicios que difícilmente podrían importarse en grandes cantidades como para abastecer la demanda interna, al menos mien-

tras continúe existiendo un bajo nivel de uso de la capacidad instalada.

Al mismo tiempo; el ritmo de incremento de los precios (medido por las variaciones del IPC) ha sido de aproximadamente 2% (1.8% en febrero, 2.3% en marzo), bajando en el mes de abril, en que a mediados de mes se registra 0.5% de aumento en los precios. Para lo que va del año, la inflación se estima en 6.6% a mediados de abril.

Es decir, el producto aumenta y la inflación se reduce, o por lo menos no aumenta con respecto a lo registrado en los últimos meses de 1993. Todo esto mientras, como secuela de la sorprendentemente exitosa operación de privatización de CPT-ENTEL, un viento de optimismo recorre el país (o al menos los medios de comunicación) a la vez que se van firmando convenios con distintas empresas extranjeras para la explotación de diversos recursos naturales (gas, petróleo, minerales), convenios que reciben amplia cobertura noticiosa. En suma, un panorama como para volver risueño y locuaz al más taciturno y lacónico de los gobernantes.

Pero con numerosos problemas y obstáculos

Al mismo tiempo, también es

claro que la recuperación que se observa no ha logrado todavía, resolver importantes problemas y que la política económica parece incapaz de superar serios obstáculos para un crecimiento económico sostenido. Un primer problema es la persistencia del elevadísimo nivel de desempleo y subempleo. Según cifras del Ministerio de Trabajo, durante 1993 sólo el 12.8% de la población económicamente activa estuvo adecuadamente empleada. El desempleo llegó a 9.6% de la PEA y el subempleo alcanzó la elevada cifra de 77.6%. Ello constituye, en opinión de la misión de FMI que estuvo en Lima a propósito de la firma de una nueva carta de intención con el gobierno peruano, en el marco del Acuerdo de Facilidad Ampliada que está en vigencia, un serio problema. La recuperación productiva aún no es lo suficientemente vigorosa como para tener un efecto significativo de generación de empleo adecuado.

En segundo lugar, en los últimos meses se ha agravado en algo la situación de "atraso cambiario", al mantenerse estable la tasa de cambio mientras los precios internos se incrementan. Un resultado de esto es la situación repetidamente deficitaria de la balanza comercial y la balanza en cuenta corriente, déficits que son conjugados por el lado de la cuenta de capital, en especial de capital privado de corto plazo. Así, mientras la balanza en cuenta corriente es deficitaria, el Banco Central anunció el 30 de marzo una cifra record de re-

servas internacionales netas: US\$ 3079 millones.

Nada lleva a pensar que el denominado atraso cambiario se reduzca en el corto plazo. Más bien, como consecuencia de la privatización de las grandes empresas públicas (muy pronto se empezará a privatizar la banca asociada y grandes empresas como Petroperú y las empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica, además del complejo minero que es Centromin) se espera una afluencia aumentada de divisas, que será una fuerza contraria al ajuste de la tasa de cambio.

Un tercer problema es la persistencia del elevado nivel de las tasas de interés, en especial de las tasas activas. En general, tanto los préstamos como los otros servicios y operaciones de la banca comercial son onerosos, aunque las tasas activas bajaron hasta el nivel de 15% al año, para operaciones en dólares. El problema del alto costo del financiamiento bancario ha llevado a varias empresas a tentar otras modalidades de financiamiento. Así, de 1993 a la fecha, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores ha autorizado emisiones de bonos ordinarios y de arrendamiento financiero a un puñado de empresas, que a través de esta modalidad buscan obtener financiamiento a plazo más largo (uno o dos años, en vez de 90 o 180 días prorrogables a un año) e intereses más bajos (se acercan a 10% al año) que en el caso del financiamiento bancario. Hay también el caso de una empresa

(Tele 2000) que ha emitido bonos nominativos, que dan a su tenedor la posibilidad de canjearlos por acciones, mientras que en una muy sonada operación Gloria S.A., la empresa líder del grupo Rodríguez Banda, colocó en el mercado internacional una emisión de bonos por US\$40 millones, que utilizó para adjudicarse la empresa Cementos Yura, de reciente privatización.

Pero estos son todavía intentos aislados de empresas líderes, que hacen uso de su capacidad gerencial y su solvencia para implementar estrategias de financiamiento más favorables. Los montos de financiamiento conseguidos en estas operaciones no son significativos respecto al volumen de recursos que necesita la empresa privada para funcionar y, en el mejor de los casos, reestructurarse (ver cuadro). La gran mayoría del sector empresarial privado, en especial las empresas medianas y pequeñas, se ven obligadas a pasar por las horcas caudinas del financiamiento bancario.

A casi cuatro años del gran reajuste de precios con que inició su gestión económica el presente gobierno y luego de las drásticas reformas institucionales que puso en práctica el ministro Boloña, los mercados no parecen ser capaces de dar las "señales correctas" a los agentes económicos. La economía se va recuperando pero mirando al mercado interno, el empleo adecuado es privilegio de una pequeña parte de la fuerza laboral, la sobrevaluación de la tasa de cambio no da señales de

corregirse y la tasa de interés continúa siendo muy elevada.

El físico tiene más ingresos

Básicamente como resultado (imprevisto) de la privatización de CPT-ENTEL y de las expectativas que ahora se tiene sobre próximas ventas de empresas públicas, es claro que, por primera vez desde que asumió la presidencia el ingeniero Fujimori, las cuentas del fisco experimentan un cierto alivio.

Ello debe haber influido en la decisión de aumentar las remuneraciones mínima y de los trabajadores públicos, anunciada por el presidente el 29 de marzo. La remuneración mínima vital ha sido incrementada de S/. 72 al mes a S/. 132 (US\$ 61.40); ningún trabajador público recibirá menos de S/. 300. Aunque los aumentos son importantes en términos relativos, el nivel de las remuneraciones sigue siendo bajo. El aumento no ha suscitado mayores comentarios, porque era necesario hace buen tiempo; los niveles remunerativos mínimo y estatal han permanecido congelados por más de dos años. Además, cae muy bien en un año pre-electoral.

También se ha estado discutiendo, al interior de los círculos gubernamentales, el destino que se dará a los fondos de la privatización. Al parecer, según informó el ministro Camet al Congreso Constituyente en la primera semana de abril, se habría decidido repartir el mayor ingreso obtenido, entre gasto social (US\$ 450 millones), in-

Emisión autorizada de bonos

Empresas	Bonos ordinarios US\$	Arrend. financiero US\$
Volvo S.A.	10 millones	
CARSA	4 millones	
E. Ferreyros	5 millones	
FESSA	11 millones	
Bco, Nuevo Mundo		4 millones
FINSAPESA		25 millones
BANEX		10 millones
Bco, Interandino		10 millones
Latino Leasing		14 millones
Bco. Comercio		20 millones
TOTAL	30 millones	83 millones

Fuente: Entrevista al Presidente de CONASEV, Diario El Comercio, 18.4.94.

versión productiva (US\$ 500 millones) y pago de deuda (US\$ 200 millones). No queda claro cuál es la deuda que se pagaría, aunque se ha dicho que sería aquella contraída a intereses muy elevados. Parecería que el gobierno considera la posibilidad de acogerse al Plan Brady, y que este pago se explicaría en función de ese esquema de reducción de deuda. Pero primero tendría que resolverse el impasse creado por el no reconocimiento de la deuda por US\$ 70 millones con el Chemical Bank y el American Express Bank, derivada del financiamiento de la operación de compra de embarcaciones por la hoy liquidada Compañía Peruana de Vapores, que constituyó una cuantiosa estafa a la empresa pública.

En cuanto al gasto social, la incapacidad de FONCODES para convertirse en un verdadero programa para este fin es ahora patente. Al parecer habría un relanzamiento del programa social, que buscaría repetir la experiencia mexicana en este campo, tomando de esa experiencia incluso el nombre: Solidaridad.

LA SITUACION DEL EMPLEO EN LIMA EN 1993

Perspectivas

En varias ocasiones personalidades de la política nacional han hecho referencia a la buena estrella del presidente Fujimori. La sorpresa de la privatización de CPT-ENTEL y el éxito que se espera de las próximas subastas de empresas parecen confirmar esta impresión. Justamente en el año previo a las elecciones generales, el presidente Fujimori podría tener los recursos para apoyar la generación de empleo, incrementar el gasto social y darse el lujo de pagar además parte de nuestra deuda externa, todo ello sin presionar excesivamente sobre las cuentas fiscales.

¿Será ello suficiente para asegurar la reelección? A estas alturas, nadie puede decirlo a ciencia cierta, como nadie puede saber si la economía continuará creciendo o si más bien, como piensan los críticos de la política económica, en ese permanente déficit de la balanza en cuenta corriente se incuba el germen de una crisis. □

En declaraciones recientes, el señor Ehtisham-Uddin Ahmad, jefe de la Misión del FMI que visitó el Perú a fines de marzo e inicios de abril, manifestó que: "Uno de los problemas que se

**Francisco
Verdera**

apreció con mayor nitidez en esta visita ha sido el desempleo, que está íntimamente ligado con el problema de la subsistencia en la agricultura, así como con los efectos secundarios del terrorismo". Añadió que: "Todo programa de ajuste genera reducción de puestos de trabajo en las empresas públicas y la administración central del Estado, pero algo se tiene que hacer para ayudar a la gente" (Gestión 5.4.94).

Resulta necesario destacar, cuando menos, dos puntos en relación a estas apreciaciones, puesto que ellas podrían orientar las acciones futuras del gobierno en materia de empleo. Primero, el presentar como causas del desempleo el atraso de la agricultura y el terrorismo, limitándolo a los pobladores de las zonas deprimidas. Segundo, el sostener que el programa de ajuste provoca desempleo en el sector público, limitando una vez más su impacto a un sector específico. Los resultados de la Encuesta de Hogares de Lima Metropolitana de agosto-setiembre de 1993, llevada a cabo por la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo, permiten calificar tales apreciaciones.

Desempleo creciente

El cuadro adjunto presenta la evolución de los niveles de empleo de Lima entre 1991 y 1993. En primer lugar se observa un gran crecimiento de la PEA a la fuerza laboral, bastante mayor en 1992-93 que en 1991-92. Al mismo tiempo el desempleo abierto aumentó en mayor medida, alcanzando una tasa cercana al 10% de la PEA y abarcando a 274 mil personas desocupadas que buscaban activamente trabajo. La hipótesis que surge de inmediato es que el mayor desempleo ha conducido a que más miembros de las familias tengan que trabajar o buscar trabajo. En efecto, las tasas de actividad de los jóvenes adolescentes (14 a 19 años) y de las mujeres de 25 a 34 años se han acrecentado significativamente entre 1992 y 1993.

Empleo público en ascenso

Contra lo que podía esperarse, el empleo público aumentó fuertemente en Lima en 1992-93, hasta el punto de prácticamente compensar el descenso que mostró en 1991-92. El nivel del empleo público en Lima se mantiene por encima de 290 mil trabajadores entre 1991 y 1993. Esto parecería contradecir las informaciones periódicas que indican una reducción de 338 mil trabajadores públicos a nivel nacional entre 1990 y 1993, citando como fuente al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) (por ejemplo,

Evolución del empleo en Lima Metropolitana 1990-1993

	1991		1992		1993		Var. % 1991-92	Var. % 1992-93
	miles	%	miles	%	miles	%		
PEA a/	2405.2	100.0	2531.6	100.0	2765.9	100.0	5.3	9.3
Desempleo	141.9	5.9	238.0	9.4	273.8	9.9	67.7	15.1
Subempleo	1888.1	78.5	1921.5	75.9	2140.8	77.4	1.8	11.4
Adec. empleado	375.2	15.6	372.1	14.7	351.3	12.7	-0.8	-5.6
Sectores								
Público c/	295.5	12.3	259.0	10.2	291.6	10.5	-12.4	12.6
Privado	1088.1	45.2	1160.6	45.8	1324.5	47.9	6.7	14.1
Independiente d/	854.2	35.5	925.6	36.6	939.5	34.0	8.4	1.5

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social-Dirección Nacional de Empleo y Formación Profesional. Boletines de las Encuestas de Hogares 1991-1993.

a/ Excluye a las trabajadoras del hogar.

b/ Comprende el subempleo por horas y por ingreso. Los niveles de ingreso utilizados por la DNEFP para determinar el subempleo por ingreso fueron de 299, 515 y 736 soles en 1991, 1992 y 1993, respectivamente.

c/ Trabajadores del gobierno central, gobiernos locales y FF.AA. y PP. Excluye a los trabajadores de empresas públicas que se encuentran en el sector privado.

d/ Abarca a independientes y a trabajadores familiares no remunerados.

el diario *Expreso* del 27.12.93). En realidad, las cifras del INAP para el país coinciden con las registradas por las Encuestas de Hogares entre 1991 y 1992, al reflejar una reducción de empleados públicos en Lima. La diferencia en la magnitud del descenso se debe a que las cifras del INAP no incluyen a las Fuerzas Armadas y Policiales y a que la información del INAP se basa en la declaración de las entidades públicas. Este procedimiento conlleva subestimaciones del empleo público por parte del INAP, originadas en que el envío de la información no es obligatorio y que las informaciones corresponden a diferentes momentos.

Las cifras del INAP tampoco contrarían el resultado de la Encuesta de Hogares de 1993, puesto que el INAP señala que existen 152 mil empleados públicos en Lima, sin contar ejército y policía y reconociendo que algunas entidades "aún no les han enviado información." Como se sabe, el Ministerio de Economía y Finanzas también registra cifras mayores que las de INAP, entre otras razones, por incluir al personal de los institutos armados.

Finalmente, la explicación del descenso inicial y ascenso posterior del empleo público radica en que efectivamente se redujo de manera drástica personal de ministerios, institutos y municipios, pero, para contratar a otro personal, destinado a otras nuevas entidades (Superintendencias tributaria, de Aduanas, de AFPs, FONCODES, CEPRIS) o a las mismas ubicaciones del personal des-

plazado (municipios y ministerios). En el primer caso en condiciones de trabajo y de remuneración mejores; en el segundo, contratando "servicios" a través de agencias o cooperativas de empleo temporal, con remuneraciones muy bajas y condiciones de trabajo precarias. En este último caso, el propio gobierno, los gobiernos locales y el mismo Ministerio de Trabajo fomentan directamente relaciones laborales fraudulentas.

M

ayor subempleo

Como es conocido el problema no es sólo de falta de puestos de trabajo. Cada vez más personas que trabajan lo hacen obteniendo bajos ingresos o en jornadas de trabajo inferiores a las 35 horas semanales. El subempleo subió de 75.9% en 1992 a 77.4% en 1993. Ello se debe a que mientras la inflación persiste (39.5% en 1993) los ingresos por trabajo no se reajustaron, provocando que más trabajadores se ubiquen por debajo del nivel de ingreso necesario para ser considerados adecuadamente empleados.

El subempleo por ingresos *agudo* –recibir en promedio menos de 245 soles al mes– se incrementó más entre los obreros del sector privado que en otros grupos. El cincuenta por ciento de obreros percibió menos de 258 soles por mes en 1993 y menos de 197 soles por mes en 1992. La pérdida de poder adquisitivo entre 1992 y 1993 de la mediana de ingresos de los obreros fue de alrededor de 10 puntos porcentuales. En el caso de los empleados privados la pérdida fue de 15 puntos porcentuales. La reducción de los ingresos reales por trabajo y la ausencia de protección legal o social en el sector privado afectó especialmente a los empleados y obreros contratados.

S

ector informal saturado

Finalmente, la magnitud de los trabajadores independientes y trabajadores familiares se estanca entre 1992 y 1993 y el número de independientes se re-

CONSECUENCIAS

duce de 825 mil en 1992 a 795 mil en 1993. Para la Dirección de Empleo, el porcentaje de la PEA Ocupada en el sector informal de Lima aumentó fuertemente, de alrededor de 46% a 58% de la PEA en 1991-92 para caer a menos de 50% en 1993. Una forma de entender este fenómeno es atendiendo a que casi la totalidad del aumento de los trabajadores independientes en 1991-92 (96% de ellos o 55 mil personas) fue como vendedores ambulantes. En cambio en 1992-93, el número de independientes se redujo en 30 mil trabajadores, y la capacidad de absorción de empleo como vendedores ambulantes fue nula.

Este descenso en los trabajadores independientes en el último año se absorbe como trabajadores familiares no remunerados y como una especie de "nuevos informales". En efecto, los trabajadores familiares aumentaron en 44 mil personas. Por nuevos informales nos referimos al gran aumento de empleados y obreros privados contratados por empresas intermediarias, agencias y cooperativas de empleo temporal que abastecen a los sectores privado y público en servicios de limpieza, seguridad, ascensoristas, secretarías y todo tipo de personal obrero y administrativo, violando el propio Decreto Legislativo 728, de Fomento al empleo. En realidad, este nuevo tipo de informalidad es mayormente empleo ilegal de trabajadores, a los que se subre-

munera y burla sus derechos laborales mínimos, como es el acceso a la seguridad social, no pudiendo siquiera afiliarse a las costosas Administradoras de Fondos de Pensiones o al Instituto Peruano de Seguridad Social.

Efectos del ajuste

Estas son algunas de las consecuencias más visibles e inmediatas del programa de ajuste en el caso de Lima. La falta de empleos y la baja remuneración y desprotección de los empleos que se crean no es solamente el mayor problema en las zonas más deprimidas del país. Lo es también en Lima. El programa de ajuste no sólo afecta al empleo público sino también a la gran mayoría de trabajadores y sus familias. Tal vez debió pensarse en que "algo se tiene que hacer para ayudar a la gente" antes de lanzar un programa económico de ajuste excesivamente recesivo. □

Catorce años de violencia política casi ininterrumpida dejarán, sin duda, una marca honda en la sociedad peruana que se avecina, al punto que en el futuro probablemente se hablará de una época "pre" y otra "post", guerra interna, al referirse a ella. No todas las consecuencias de la violencia han de ser, sin embargo, negativas, como lo expresan estas ideas de Peter Waldmann; Profesor de la Universidad de Augsburg, en Alemania, y estudiante de los conflictos internos en diversas partes del mundo.



**Peter
Waldman**

Cuáles son las consecuencias de los conflictos internos violentos, es decir de las guerras civiles o las situaciones que se aproximan a un enfrentamiento civil en una sociedad? Una primera

observación que llama la atención es el inmenso número de estudios sobre *las causas* de rebeliones, protestas y guerras civiles pero son muy escasas las investigaciones sobre *el impacto* de la violencia; casi no se encuentra nada sobre las *consecuencias*. Me parece que es un problema muy relevante, no sólo desde el punto de vista científico sino también desde un punto de vista práctico. La

DE LOS CONFLICTOS VIOLENTOS INTERNOS*

ONU ha intervenido en el conflicto de Somalia a partir de la experiencia exitosa lograda en el proceso de pacificación de El Salvador. Esta experiencia produjo mucho optimismo en ciertos grupos políticos, los cuales consideraban que una intervención decidida desde afuera podía llevar a buen término los procesos de paz. Sin embargo, este es un criterio que no debe generalizarse, porque si no se dan determinadas condiciones en la sociedad donde se desarrolla la guerra civil, cualquier intervención foránea, así sea muy fuerte, no tendrá resultados exitosos.

En mi exposición voy a señalar algunas observaciones generales que presento como tesis a partir de algunos casos empíricos que conozco, como son: Irlanda del Norte, el caso vasco, el Líbano, Colombia y un poco de Perú. Señalaré tres puntos: a. los efectos inmediatos de la violencia; b. la independización de la violencia. Es decir, la guerra define un sistema que mantiene su propia dinámica al margen de los otros sistemas de la sociedad y c. cómo este sistema influye y transforma la sociedad. Finalmente me atrevo a señalar algunas perspectivas de los conflictos internos en el escenario mundial.

Los efectos inmediatos

En primer lugar, sobre los efectos inmediatos: hay que hablar de las víctimas que pueden ser miles como en el caso de Irlanda o el vasco, o diez miles como en Perú y Líbano o cien miles

como en Colombia. El número de, víctimas no es constante, porque las guerras internas tienen un movimiento de "olas", empiezan con un flujo muy violento con muchas víctimas, luego hay un reflujo donde disminuyen los actos violentos y las víctimas hasta que se produce una segunda escalada. Asimismo, estas guerras internas son particularmente brutales. Sufre principalmente la población civil en tanto los grupos militantes directamente involucrados saben reducir sus costos. En algunas circunstancias incluso se mata por proporciones: si es muerto un protestante en Irlanda, inmediatamente se mata a cualquier, católico, algo similar pasa en el Líbano. Es decir ya no importan las calidades personales para determinar su "ajusticiamiento" por decirlo de alguna manera sino la pertenencia a un grupo político, religioso o étnico.

Otro rasgo importante consiste en que al inicio de una guerra civil, las tensiones hasta el momento ocultas van a aparecer de manera rápida y explosiva. Familias que durante muchos años habían convivido pacíficamente dentro de un mismo barrio, se descubren ahora enemigos irreconciliables. El momento de las negociaciones acaba, todo parece separar a las personas y los políticos que buscan acuerdos son señalados como traidores. Una primera deducción de esto es que las fronteras no son sólo geográficas sino principalmente simbólicas. Uno de las características en los conflictos étnicos es la subdivisión de un territorio que

previamente se encontraba unido. Obviamente para las personas que viven en estas situaciones, resulta peligrosos encontrarse en un territorio equivocado. Hay ciudades que han sido atravesadas por nuevas fronteras, que a la vez son muy cambiantes. Por ejemplo en Belfast hay grandes muros que separan dos comunidades que de otra manera se atacarían mutuamente; lo mismo ocurre en Beirut. Luego de definirse estas nuevas fronteras, se eliminan rápidamente las islas de un grupo dentro del territorio perteneciente a otro grupo. Los enclaves son los primeros en caer en una confrontación civil. Para los que viven en el territorio de su grupo no hay problema, sino para los que tienen que desplazarse de sus zonas a las nuevas zonas donde se encuentra el mayor número de miembros de su grupo étnico. Por esa razón, las guerras civiles implican en primer lugar fuertes movimientos migratorios, grandes, grupos humanos que se trasladan de un sitio a otro.

Guerra interna y modernización

Por otro lado, una cierta consecuencia de la violencia sería un relajamiento del control social. Es decir, como el estado pretende tener el monopolio de la violencia, el solo hecho que se rompa esta situación significa un cuestionamiento de la auto-

*Versión resumida de su exposición oral en el Seminario sobre "Violencia política en América Latina", organizado por el Instituto Goethe y el IEP, Lima. 11-13, de abril de 1994.

ridad del estado. Este es un proceso ambiguo. Por un lado, al relajarse las sanciones aumentan los delitos comunes, pero también ocurre el caso de gente que vivía en términos de vasallaje en pequeños poblados rurales y de pronto goza de un margen importante de libertad. En España, por ejemplo, es claro que la guerra civil, rompió una serie de patrones tradicionales de dominación. Hoy es señalada como el hito fundador de la modernización del país.

En situaciones de crisis, unas instituciones se hunden y al mismo tiempo surgen redes y estructuras de auto-ayuda, de solidaridad ante la ausencia del estado de atender a las víctimas de la guerra interna. Entonces en las situaciones de conflicto tenemos un movimiento de desorden, de pérdida de control, pero junto con esto hay también una cierta emancipación de controles tradicionales, de dominaciones de larga data.

Autodinámica de la violencia

En cuanto al segundo punto, sobre la autodinámica de la violencia que se independiza, podemos señalar que hay dos posibilidades: o la guerra civil es muy corta y un partido resulta vencedor; con lo que no ha habido el tiempo para que se desarrolle una dinámica propia, o si dura más tiempo, la violencia empieza a dominar en todos los ámbitos. Pareciera que hay una

especial fertilidad de la violencia que se expande en la estructura y las instituciones de la sociedad. Normalmente la violencia en sociedades ordenadas se restringe a un marco muy estrecho en determinadas ocasiones, mientras que en situaciones de guerra civil se da una expansión de la violencia como mecanismo para resolver conflictos, para luego el medio convertirse en un fin en sí mismo. Ya no importan las razones por las que se recurre a la violencia, lo que importa es la forma que va a adquirir esta violencia. La guerra se libera tanto de valores éticos como de cálculos racionales; la violencia avasalla a la sociedad y se legitima por sí misma.

Esto, implica decir que la violencia recluta sus propios adeptos y crea sus propios actores. Esto resulta importante porque en general hay un cambio en la sociedad; aparecen personas con actividades vinculadas, a la, violencia: guardaespaldas, sicarios, policías particulares. Estos grupos están interesados en mantener sus fuentes de ingresos, en mantener la situación de la guerra civil o el desorden. Al mismo tiempo, los grupos involucrados en la violencia política van a empezar a asumir tareas estatales; se constituyen en una suerte de estado dentro de un estado. Este es el caso, por ejemplo, del IRA que funciona no sólo como un grupo político armado sino que cumple funciones estatales como brindar seguridad social a los familiares de sus víctimas.

Tenemos entonces cierta estabilidad dentro de un escena-

rio violento –y por lo tanto inestable– que encuentra su propia fórmula entre los grupos beligerantes. Ya no se trata de llegar a una situación donde un grupo resulte vencedor, sino en asegurar la seguridad y supervivencia del grupo. La violencia como modo de acción, como actor y como forma de justificación gana cierta autonomía y dinámica.

La violencia crea nuevos actores

Cualquiera que observe los conflictos actuales puede darse cuenta que la violencia entra en una espiral interminable. Las disputas, incluso dentro de un grupo, se resuelven violentamente: los que piensan de manera diferente son llamados traidores para luego ser ejecutados.

Más aún, como señalamos al principio, en cada guerra civil hay fases de calma; en estos momentos los militantes no se reintegran a la vida civil, sino que se convierten en delincuentes comunes. Ya la violencia se ha vuelto un factor hegemónico. Surgen entonces los movimientos por la paz, que realizan acciones, marchas, desplegando un activismo muy importante; pero, lamentablemente, estas iniciativas nunca han logrado terminar ningún conflicto.

En resumen, una guerra interna crea nuevos símbolos, palabras, valores y códigos así como nuevos actores y fuerzas sociales. Por eso cuando después de años de lucha las partes beligerantes inician conversaciones

para lograr un acuerdo el motivo que originó inicialmente la subversión pierde centralidad. Por ejemplo en El Salvador el motivo de la guerra fue la exigencia por una reforma agraria, por una mejor distribución de la tierra. Hoy en el acuerdo de paz firmado por el gobierno y los representantes del FMLN el problema de la tierra y la reforma agraria ocupan un lugar mínimo en el tratado. La mayor parte trata sobre los mecanismos que se establecen para garantizar la adecuada reinserción civil de los guerrilleros y militares; es decir un problema creado por la propia situación de violencia.

Efectos indirectos y de largo plazo

Veamos ahora el tercer punto: los efectos de la violencia en la sociedad. En primer lugar, las guerras civiles tienen efectos inmediatos así como efectos indirectos que crean un nuevo sistema hegemónico de la violencia. Un primer efecto es que el viejo equilibrio de poder cambia radicalmente. Tenemos varios tipos de guerra civil. En los conflictos étnicos podemos notar que las viejas divisiones de la guerra fría no han cambiado mucho; dentro de los viejos bloques hay una redistribución del poder.

Las clases sociales por su parte, también sufren cambios importantes; se crean nuevas vías de ascenso social para la clase media baja y para los sectores más pobres. En estos escenarios van a predominar los

personajes que mejor se adaptan a la constante flexibilidad que los tiempos exigen. En algunos casos los grupos comerciantes lograron centralizar grandes extensiones de tierras porque los propietarios originales tuvieron que abandonarlas por la violencia. Asimismo hay un efecto de "democratización" de la sociedad en tanto todos los miembros de la sociedad comparten los mismos riesgos. Por ejemplo el riesgo de la muerte, de la criminalidad. Tenemos entonces una nivelación muy drástica; cuando no hay luz todos padecen. Estos procesos dependen de la intensidad de la guerra y del desarrollo de cada país. En general, los empresarios y ejecutivos extranjeros reaccionan de una manera más sensible que los propios nativos, quienes pueden adecuarse a los escenarios violentos; y siempre van a existir sectores que pueden obtener grandes ingresos en escenarios de guerra; por ejemplo, la industria de la seguridad.

En cuanto a los efectos morales normalmente se habla de una crisis de valores, de aumento del pesimismo. Considero que debemos de tener cuidado con estas fáciles interpretaciones porque la violencia puede provocar salidas diferentes. Por un lado desarrolla altos niveles de indiferencia entre grupos sociales, pero también construye solidaridades. Hay que notar que la mayoría de los análisis sobre la violencia son elaborados por intelectuales de clase media y para este sector la guerra es lo peor que puede pasarles. Pero si uno indaga entre los

habitantes de Somalia o de Irlanda del Norte, a ellos la situación tal vez no les parezca tan drástica.

Finalmente, podemos señalar que entre el hecho violento y sus efectos de largo alcance existen tantas variables y de tan distinto orden, que es difícil generalizar alguna afirmación. A veces la guerra civil puede ser un empuje de modernización; en este caso la guerra civil reemplaza a las revoluciones. En otros casos, la guerra civil sirve como un freno al proceso de modernización; éste es el caso de la mayoría de conflictos étnicos. La violencia logra mantener una unidad al interior del grupo en base a las lealtades tradicionales, que en otras circunstancias sería imposible de lograr. □

SOBRE FAITES E INTELLECTUALES: DOS LIBROS DELINCUENCIA Y SOCIEDAD EN LA LIMA D

El delito y los delin-
cuentes han, ejerci-
do, desde siempre,
una extraña fascina-
ción. La tradición
oral, la literatura, y
más recientemente
el cine y la televi-
sión, se han encar-
gado de registrar (y

**Carlos
Aguirre**

reproducir) esa mezcla de admiración, temor y curiosidad que generan aquellos a quienes la ley considera criminales. Las masas excitadas ávidas de es-
pectar las ejecuciones públicas de otras épocas han cedido el paso a los televidentes y lectores de diarios sedientos de noticias sobre criminales y sus hazañas. Muchos de estos delin-
cuentes quedaron en el recuerdo colectivo como símbolos de valentía, coraje, y aún de generosidad y emoción social. Y aunque los historiadores raramente encuentran rastros "justicieros" entre los bandidos, el mito persiste tercamente. Las ciencias sociales también se sintieron atraídas por estos personajes, aunque en este caso se trata de algo más: el estudio del delito contribuye, también, a la comprensión de una sociedad.

Las ciencias sociales en el Perú, a diferencia de la literatura y el cine, no han frecuentado estos derroteros. Hace algunos años, en tonos distintos, Alberto Flores-Galindo y Hugo Neyra llamaron la atención sobre esta carencia. La reciente publicación de dos libros sobre delincuencia y prisiones en la

Lima de hoy promete renovar el interés por este tema.¹

Los dos libros son de naturaleza distinta. El trabajo de Pérez Guadalupe es una detallada y sistemática descripción de las formas de convivencia y organización dentro de esa comunidad sui-generis que forman los 5,000 presos del penal de Lurigancho. Ocho años de trabajo con los presos como agente pastoral le permitieron al autor penetrar en la cultura carcelaria, conocer la jerga y estilo de vida de los delincentes, y aproximarse sin prejuicios a la cultura "faite". El libro de Sánchez León y del Mastro, por su parte, plantea, en una perspectiva más sociológica, el problema de los vínculos entre delincuencia y sociedad en la Lima de los ochenta.

La cultura "faite"

Faites y *atorrantes* es una etnografía, en el sentido más cabal del término, del penal de Lurigancho. En los años en que el autor recogió su información los presos vivían en una suerte de autogobierno, pues los empleados penitenciarios habían sido retirados y la Guardia Republicana sólo vigilaba los exteriores del penal. Las estructuras de poder, la base económica, y las jerarquías (culturales, de grupo, de barrio) que daban sustento a este régimen son descritas con detalle en el libro.

El tema crucial es el tráfico de pasta básica de cocaína dentro del penal. Los "taitas", especie de caudillos que controlan pabellones y "barrios", y que

antes basaban su poder en el prestigio delincentual y la "valentía" que exhibían, son ahora los "menes" de la pasta. Ellos controlan todo, desde la comida y la droga hasta la vida de quienes violan las normas por ellos establecidas. Constituyen, a su manera, el grupo "dominante" dentro de la prisión. A partir de allí se genera una estructura de relaciones, solidaridades, conflictos, e incluso una "justicia" propia, con sus criterios de "legalidad", trasgresión, y castigo. Algunos rasgos de la cultura "faite" ameritan ser subrayados: el barrio como la fuente más importante de identidad colectiva; el respeto a las jerarquías nacidas de la propia actividad delictiva; cierta "decencia" para saber ganar y perder; asumir el robo y el delito como una verdadera profesión y un estilo de vida; la gratitud obligada hacia quienes les tienden la mano en momentos de necesidad o riesgo (médicos y sacerdotes, por ejemplo); la fidelidad a sus principios, mas no necesariamente a las personas; el desprecio hacia los violadores, ladronzuelos de poca monta, y "atorrantes" consumidos por la pasta. El Faite (con mayúscula), especie de "tipo ideal" de esta peculiar cultura, trasunta una actitud de orgullo y "decencia" que lo distancia del común de los delincentes y genera entre ellos admiración y respeto. Esta cultura delincentual, pese a todo, no está desligada de la cultura de los de afuera, de la sociedad "legal": "se entrecruza constantemente con ella, y a la larga es su propio reflejo" (p. 195).

* Historiador. Prepara una tesis doctoral sobre *Delito y modernización en Lima, 1850-1930*, para la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos.

1. Abelardo Sánchez León y Marco del Mastro, *En el juego de la vida. Ser delincuente en Lima* (Descó, 1993), y José Luis Pérez Guadalupe, *Faites y atorrantes. Una etnografía del penal de Lurigancho* (Centro de Investigaciones Teológicas, 1994)

OS SOBRE E HOY

La idealización del mundo delictivo

No tenemos espacio para reseñar muchos de los sugerentes temas abiertos por este libro, desde el lenguaje oral y gestual de los faïtes hasta la curiosa religiosidad que profesan. Permítasenos sólo presentar dos observaciones. Primero: el necesario interés en sistematizar el funcionamiento de la sociedad carcelaria obliga al autor a privilegiar en su exposición aquello que "tiene sentido", que se sujeta a la norma. Faïtes y atorantes, como él mismo advierte, son "tipos ideales" que no siempre corresponden a la realidad. Por ello, es posible que el libro nos dé una visión parcial del mundo de la delincuencia y corre el riesgo de "idealizar" el mundo delictivo" al presentarlo como un mundo, organizado, con reglas que todos respetan. Segundo: nos sorprende el silencio del libro respecto a la influencia del factor étnico dentro de la cultura delincencial y carcelaria. ¿No existe? ¿No es fácil de percibir? ¿No es relevante? ¿Los presos no hablan de ello? Si los prejuicios raciales tiñen los comportamientos cotidianos de los peruanos en general, no resulta creíble que carezcan de importancia dentro del universo cultural y valorativo de los delincuentes.

¿La delincuencia vista desde dónde?

Por su parte, *En el juego de la vida* es un ágil compendio de las diversas manifestaciones delictivas en la Lima de los años ochenta. Combinando entrevistas, encuestas y abundante información periodística, nos ofrece un collage de impresiones, descripciones, análisis y autoretratos que, sin embargo, no siempre resulta coherente. Las modalidades delictivas y los cambios operados en los últimos años con el incremento del narcotráfico y el secuestro, la actividad delictiva de los "custodios del orden" (la policía), el rol de la cárcel como agente socializador y sus vínculos con la sociedad de afuera, son algunos de los temas tratados. Pero, para ser sinceros, no encontramos en el libro mucho más de lo que ya conocíamos a través de reportajes periodísticos. Aunque los autores buscan "privilegiar la mirada que sobre la sociedad extiende el delincuente" –lo que hubiera resultado ciertamente novedoso–, en realidad el libro es casi lo contrario: la mirada de la sociedad "legal" –y sus intelectuales– sobre la delincuencia. No es casual que la última frase del libro sea un grosero reproche contra su informante estrella, "La Gringa", por haber reincidido en el delito.

Uno de los problemas más serios del libro es la asociación que se establece en muchos pasajes entre la delincuencia "co-

mún" y la subversión política. A pesar de que los autores explícitamente reconocen el distinto carácter de ambos fenómenos, en la estructura narrativa se produce a veces una arbitraria mezcolanza, lo que genera dificultades metodológicas e interpretativas. En repetidas ocasiones se afirma que "la sociedad" –así, en abstracto– tipifica a los subversivos como delincuentes (i.e. p. 48, 85), dando la impresión de que los autores se hicieran eco de tal calificación. Constantemente se pasa de la delincuencia común a la subversión sin la necesaria pausa, como ejemplos distintos de un mismo fenómeno de violación de la legalidad. Creemos que los autores, finalmente, no pudieron escapar al clima de aprehensión generado por la delincuencia y el senderismo, y terminan reproduciendo en el libro una percepción sesgada de los fenómenos violentistas de la sociedad peruana de hoy.

Otro aspecto que no termina de convencernos es la asociación entre cárcel y ciudad. Lima sería la cárcel grande, Lurigancho la cárcel chica. Es posible que para algunos delincuentes sea así: la ciudad los acecha, los cerca, no les da salida. Además, como enfatiza Pérez Guadalupe en su libro, las condiciones de vida dentro de la prisión no son muy distintas de aquellas que los delincuentes tienen afuera, en la ciudad. Pero afirmar que para "la mayoría de los ciudadanos" (p. 165) Lima es (o era) una cárcel, parece mas

un recurso literario que una realidad palpable; Pese a estas reservas, el libro cumple con ofrecer un panorama de la delincuencia, sus formas de operación, las manifestaciones de la "cultura delincencial", sus relaciones con la sociedad legal, y la sórdida realidad de las prisiones.

L a delincuencia: una construcción social

Algo que queda claro luego de leer estos trabajos es que hoy, en el Perú, no se sabe bien dónde está la ley y el orden, quién es delincuente y quién no. Hugo Neyra sostenía que la extensión de las conductas "anómicas" ponía en riesgo la posibilidad misma de administrar el país. Policías abusivos y asal-

tantes son el ejemplo más conocido, pero también podemos mencionar empresarios tramposos, banqueros estafadores, políticos corruptos, y la cadena sigue hasta llegar a los informales que adulteran productos o los chóferes que no respetan las normas de tránsito. Estos libros nos hablan de quienes violaron la ley, fueron capturados, sentenciados y luego reclusos, pero afuera hay muchos, muchísimos más, cuya conducta no se ajusta precisamente a los mandatos de la ley. Esto nos permite remitirnos a una idea central: la delincuencia es una hechura de la sociedad, el resultado de una determinada estructura social y cultural, no una "anomalía" o "patología" individual o colectiva. La delincuencia es, como se dice ahora, una "construcción social". Y lo es en un doble sentido: al sancionar determinadas actividades como ilegales se "construye" la figura

del delincuente; pero al perseguir y castigar selectivamente, la sociedad convierte a la delincuencia en una hechura a la medida de quienes detentan poder económico y/o político. Pero hay además otro nivel que nos es revelado por estos trabajos: la delincuencia como una construcción propia, una forma de cultura creada y compartida por extensos sectores sociales, una normatividad peculiar, parecida pero diferente de la normatividad oficial. Reconocer estos diversos niveles de elaboración social es el punto de partida para cualquier postura ante el problema. Lo que queda claro es que mientras no se democratice la sociedad, y sobre todo la administración de justicia, seguirá vigente lo que escribió un preso español citado por Pérez Guadalupe: "En este sitio maldito / donde reina la tristeza/ no se condena el delito/ se condena la pobreza". □

IEP

INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS

Horacio Urteaga 694 LIMA 11 ☎ 323070 / 244856 FAX (005114) 324981

BY AIR MAIL
VIA AEREA

